

la noción de autonomía en términos de reconocimiento recíproco, además del interés en las patologías alienantes de la sociedad, ligan a esta teoría con el ideal socialista. Teniendo en cuenta que el socialismo ha atacado tradicionalmente las causas de la desigualdad y siendo la propiedad un factor clave en ello, cabría preguntarse si no sería necesario que una teoría de justicia de corte socialista explicitase su posición con respecto a la propiedad, dando cuenta de los modos legíti-

mos e ilegítimos de apropiación y conservación de la misma a la luz de los principios expuestos.

Por otra parte, el libro también aporta excelentes reflexiones sobre justicia global enmarcados en la propia teoría de justicia, lo cual muestra el carácter sistemático aunque no clausurado, del programa presentado.

M.^a Fernanda Diab
UDELAR (Uruguay)

NOTAS

¹ Elster Jon, *Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad*, Barcelona, Península, 1988.

² Pereira, G., *¿Condenados a la desigualdad extrema?*, p. 99.

³ Pereira, *op. cit.*, p. 105.

⁴ *Op. cit.*, 133.

⁵ *Op. cit.*, 153.

DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y DESIGUALDADES POLÍTICAS

LARRY M. BARTELS: *Unequal Democracy. The Political Economy of the New Gilded Age*, New Jersey, Princeton University Press, 2008, 325 pp.

A pesar del considerable interés mediático que está suscitando, sería precipitado calificar de oportunista la aparición de *Unequal Democracy*, el último libro de Larry Bartels. Es cierto que su publicación ha coincidido con la crisis económica y la campaña electoral en EE.UU. Pero buena parte del material llevaba años circulando, en revistas y reuniones científicas, y es el resultado, en cualquier caso, de un dilatado programa de investigación. Un programa que enlaza, por cierto, con una preocupación familiar para quienes nos dedicamos a la filosofía

política y que Aristóteles, Maquiavelo o Marx, cada cual en su contexto y a su manera, trataron de responder. A saber: ¿cuál es la relación entre las desigualdades económicas y el poder político? Y más concretamente, ¿de qué manera y en qué medida influyen las desigualdades económicas sobre la participación e influencia políticas de los ciudadanos?

En 2004, la American Political Science Association elaboró un informe en el que trataba de responder tentativamente, en el contexto reciente de los EE.UU., a esta cuestión.¹ El libro de Bartels, que participó en la elaboración del informe, puede considerarse como una extensión de los objetivos del mismo, estudiar empírica y analíticamente la relación entre las desigualdades eco-

nómicas y la desigualdad política en los EE.UU. de la actualidad.

Entre otras, en realidad. Porque de paso Bartels aprovecha para analizar otras muchas cuestiones, como las actitudes de los americanos hacia las desigualdades económicas, las explicaciones culturalistas de las recientes victorias republicanas o el apoyo a las reformas tributarias de la administración Bush. Es cierto que, a pesar de que Bartels trata de colocarlos en un contexto teórico más amplio, algunos de estos temas pueden resultar un tanto locales para quien no esté excesivamente interesado en las eventualidades de la política americana. Pero hay varias razones por las que el libro merece ser leído. Por de pronto, por la impresionante batería de datos —impecablemente presentados, por cierto, en sencillas tablas y gráficas— que presenta sobre el tema, por sus análisis contraintuitivos de muchos de los temas tratados y, sobre todo, por reintroducir el tema de las clases sociales —tema tabú en EE.UU.—² en el centro del debate académico sobre política y economía. Pero vayamos por partes.

Para empezar, ¿qué interés tiene estudiar la relación entre desigualdades económicas y políticas? La tiene, obviamente, si las desigualdades económicas que podemos encontrar en la sociedad civil son suficientemente grandes como para tener una incidencia relevante en el proceso político de toma de decisiones. Pues bien, la cuestión es que durante las últimas décadas las desigualdades económicas en EE.UU. —aunque no sólo, pero éste es el caso que estudia Bartels— se han disparado. Los datos son bien conocidos: el 0,1% más rico, que a finales de los años cincuenta poseía un 3,2% en la renta total, en 2005 poseía un 10,9%; el 1% más rico, que a finales de los cincuenta poseía el 10,2% de la renta total, en 2005 poseía el 21,8%. Así, en 2005 la

riqueza agregada de los 400 americanos más ricos, según la revista *Forbes*, superaba, por ejemplo, el producto interior de Canadá (p. 11).

Ocurre, además, que el incremento de las desigualdades no ha ido acompañado ni de una mejora en la situación de las clases inferiores ni de una mayor movilidad social entre clases. Como muestra Bartels, tanto la llamada teoría del derrame como la movilidad social son, al menos en lo que se refiere a la América reciente, sencillamente falsas. Desde luego que, tal como reconoce Bartels, hay factores no económicos —el auge de los *lobbies* empresariales o el declive de los sindicatos— que se deben tener muy en cuenta. Pero hay buenas razones para sospechar que las crecientes desigualdades económicas estén distorsionando el principio de igualdad política que Bartels recoge de Robert Dahl: «Dahl sugirió que la democracia implica “la continua atención del gobierno hacia las preferencias de sus ciudadanos, considerados como políticamente iguales”. Los Estados Unidos actuales están muy lejos de satisfacer ese estándar» (p. 2).

Durante la década de los cincuenta, Dahl había participado en el célebre debate entre pluralistas y elitistas sobre la distribución del poder político en la América de posguerra.³ Independientemente de quién llevara finalmente razón, resulta interesante observar lo obsoleto que ha quedado el debate en las circunstancias actuales. Ya en 1976 Dahl y Lindblom habían modificado su postura afirmando que «las interpretaciones corrientes que describen el sistema americano o cualquier otro sistema de mercado como un sistema de competencia entre grupos de interés están seriamente equivocadas por no tener en cuenta la posición distintiva de privilegio de los empresarios en la política».⁴ Esto, como ha recordado Andrés de Francisco, en los años setenta,

antes de las «políticas de saneamiento» y las *reaganomics*.⁵ Hoy, el mismísimo Alan Greenspan reconoce que «las efectivas y crecientes concentraciones actuales en la renta no son deseables para una sociedad democrática».⁶

Pues bien, ¿cuáles son las causas de dichas desigualdades? La respuesta, según Bartels, hay que buscarla en las políticas económicas de las sucesivas administraciones americanas. Especialmente, cuando el ejecutivo ha estado controlado por el Partido Republicano. El objetivo del segundo capítulo es, pues, (1) cuestionar la idea de que los fenómenos económicos son en buena medida independientes de las decisiones políticas: toda economía, nos viene a decir Bartels, es necesariamente economía política; y (2) mostrar la considerable incidencia que han tenido las administraciones republicanas (en comparación con las demócratas) en el incremento de las desigualdades económicas; los ingresos reales de las familias pobres, por ejemplo, subieron seis veces más con los demócratas que con los republicanos.

Supongamos por un momento que Bartels lleva razón. ¿Cómo es posible entonces que los republicanos hayan ganado tantas elecciones presidenciales desde la posguerra (incluyendo cinco de las últimas siete)? ¿Por qué votaría tanta gente pobre y de clase media contra sus propios intereses en tantas ocasiones? Una posible respuesta es que los votantes se preocupan de otras muchas cosas además de la economía y que los republicanos han sabido conectar mejor con la ciudadanía en cuestiones culturales, raciales o religiosas. El objetivo de Bartels en el tercer capítulo es demostrar que la respuesta «culturalista» es falsa. Es decir, que los americanos de renta media y baja siguen priorizando las cuestiones económicas sobre el resto (el aborto sólo es el cuarto tema de interés entre las clases medias y

el quinto entre las clases bajas) y que tampoco ha habido un giro conservador por parte de la clase trabajadora (las preferencias sobre la provisión de trabajos públicos por parte del Estado se mantienen estables, entre las clases bajas, desde 1970). Los datos muestran, de hecho, que desde 1976 «el estatus económico se ha hecho más importante, no menos importante, en la estructuración del comportamiento de voto presidencial entre los americanos blancos» (p. 76).

Pues bien, si la respuesta culturalista resulta ser falsa y las clases bajas y medias no parecen haberse movido ideológicamente en materia de economía, tal como muestra Bartels, ¿por qué motivo votarían al Partido Republicano, contra sus propios intereses? ¿Se trata de un caso de falsa conciencia? La respuesta correcta, según Bartels, hay que buscarla en una combinación de déficits de información y miopía política a la hora de evaluar las acciones económicas del gobierno, especialmente las relativas a los años precedentes al año electoral. El cuarto capítulo está dedicado, precisamente, a analizar en detalle dichos factores en combinación con la diferente manera en que demócratas y republicanos han distribuido las acciones económicas a lo largo de las legislaturas que han gobernado y el creciente papel de la publicidad electoral en la esfera política (en 1950, el gasto de campaña era de entre 60 y 80 céntimos por votante; actualmente, de entre 3 y 5 dólares). La teoría de Bartels se opone claramente a la de quienes consideran que los ciudadanos, a pesar de las asimetrías y déficits informativos, son capaces de tomar atajos cognitivos que les permiten controlar a la clase política con precisión. A modo de ejemplo, Bartels estudia tres políticas claramente perjudiciales para los intereses económicos de la clase trabajadora: los recortes tributarios de la administración Bush, la eliminación del

impuesto federal y la reducción real del salario mínimo.

Antes que nada, algunos datos. Los recortes fiscales de Bush en 2001 y 2003 —los más grandes de la historia— supondrán un coste de \$ 4,6 trillones al tesoro público entre 2001 y 2013, con una reducción esperada para 2010 del 25% para el 1% más rico, del 21% para el siguiente 4% más rico y del 10% para el siguiente 95% (p. 163). La eliminación temporal del impuesto del estado federal (*federal estate tax*), por su parte, costará \$ 186 billones al gobierno federal hasta 2011, cuando sólo afectaba al 2% más rico (p. 197).

Pues bien, si, como muestra Bartels en el quinto capítulo, los americanos son de todo menos indiferentes a las grandes desigualdades económicas y apoyan con fuerza la progresividad fiscal, ¿cómo se explica el apoyo mayoritario a ambos recortes entre las clases bajas y medias? —En los capítulos 6 y 7, respectivamente, Bartels analiza ambos casos en términos similares, como ampliamente determinados por el bajo nivel de información entre la ciudadanía. Entre los votantes demócratas, por ejemplo, «el apoyo al recorte fiscal descendió desde el 76% entre los menos informados hasta sólo un 19% entre los más informados» (p. 184).

Según Bartels —y en este punto su postura es tan aristotélica como la de Maquiavelo y Marx—, las actitudes aparentemente inconsistentes de muchos ciudadanos de la clase trabajadora pueden explicarse en buena medida como casos de simple ignorancia. Digo que es muy aristotélica porque defiende, como lo hacía el estagirita y tras él toda la tradición republicana —tanto elitista como democrática—, que quienes no son civilmente libres o, en este caso, quienes no disponen de la información necesaria para evaluar adecuadamente las cuestiones políticas en discusión —y adquirir dicha informa-

ción requiere educación, tiempo libre y dinero—, no pueden ser políticamente libres, puesto que acabarán siendo inevitablemente dominados por quienes sí disfrutan de libertad civil plena, es decir, por quienes sí disponen de educación, tiempo libre, dinero e información.

El caso del salario mínimo, analizado en el octavo capítulo, es un buen ejemplo de esta idea. A diferencia de los dos casos anteriores, las clases bajas y medias siempre han apoyado mayoritaria y consistentemente el aumento del salario mínimo. Y sin embargo, tras dos décadas de ascenso inicial durante la posguerra, su valor real ha descendido en un 40%. Aquí la evidencia aportada es elocuente. Como muestra Bartels, el valor real del salario mínimo ha descendido porque la clase política, sencillamente, no ha tenido en cuenta las preferencias de sus ciudadanos en esta materia. Y aquí volvemos a la pregunta que formulábamos al principio: ¿de qué manera influyen las desigualdades económicas en la satisfacción del principio de igualdad política, es decir, en la capacidad de los ciudadanos para influir en pie de igualdad en el proceso político?

Para estudiar este punto, Bartels analiza la atención (*responsiveness*) de los miembros de la clase política hacia las preferencias de sus ciudadanos en cuestiones tales como el salario mínimo, los derechos civiles, el gasto gubernamental y el aborto. Y más concretamente, la coincidencia entre las preferencias de los senadores americanos y las preferencias de los ciudadanos, ordenados según sus ingresos, desde las elecciones generales de 1988 hasta las de 1992. Los resultados son elocuentes y —a pesar de cierto sesgo demócrata que se percibe en otros pasajes del libro— en este caso dejan en evidencia tanto a republicanos como a demócratas. En todos estos temas, las preferencias de los ciudadanos de altos ingresos fueron

ampliamente tenidas en cuenta; las de los ciudadanos de ingresos medios, relativamente tenidas en cuenta y en ocasiones ignoradas; las de los ciudadanos de ingresos bajos, por último, *absolutamente ignoradas en todos los casos*.⁷

Los antiguos tenían una palabra para los sistemas políticos en los que el poder político está controlado por las clases ricas: oligarquía. No es de extrañar, pues, que Bartels termine citando la célebre distinción aristotélica entre oligarquía y democracia: «cuando el ejercicio del poder es en virtud de la riqueza (...) se trata de una oligarquía, y cuando lo ejercen los pobres, es una democracia».⁸ Bartels es, además, bastante escéptico ante quienes consideran que desigualdad económica e igualdad política son compatibles en un sistema institucional adecuadamente diseñado para que ambas esferas se

mantengan separadas: «La desigualdad económica tiene claramente efectos corrosivos generalizados en la representación política y las decisiones políticas en la América actual. A la luz de estos efectos, la esperanza liberal por lograr “esferas de la justicia” con “sus fronteras intactas” parece fastidiosamente ingenua y muy probablemente inútil» (pp. 284-5).

Y continúa: «En términos aristotélicos, nuestro sistema político funciona no como una “democracia”, sino como una “oligarquía”. Si nos empeñamos en halagarnos a nosotros mismos refiriéndonos a él como una democracia, debemos tener muy claro que se trata de una democracia crudamente *desigual*» (p. 287). De ahí el título del libro.

Íñigo González Ricoy
Universitat de Barcelona

NOTAS

¹ American Political Science Association Task Force on Inequality and American Democracy, «American Democracy in an Age of Rising Inequality», en *Perspectives on Politics*, 2 (4) (2004).

² Barbara Ehrenreich afirmaba recientemente que «[e]xiste el poderoso mito de que los Estados Unidos no tienen clases; de que éstas son algo vetusto inglés o europeo que hemos abolido» (*Sinpermiso*, 27 de julio de 2008).

³ Para un repaso actual del debate, cf. el prefacio a la reciente reedición de Lukes, S., *El poder: un enfoque radical*, Madrid, Siglo XXI, 2007.

⁴ Dahl, R. y C. E. Lindblom, *Politics, Economics and Welfare*, Chicago, University of Chicago Press, 2.^a ed., 1976, p. xxxvii.

⁵ De Francisco, A., *Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2007, p. 83.

⁶ *The Washington Post*, 22 de julio de 2004.

⁷ El estudio de Bartels abarca un período total de seis años. Para un análisis más extenso —aunque consistente con el de Bartels—, cf. Gilens, M., «Inequality and Democratic Responsiveness», en *Public Opinion Quarterly*, 69 (2005).

⁸ *Pol.*, 1280a.